



*“Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”*

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADA PONENTE**  
**ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA**

Medellín, diez de julio de dos mil veintitrés.

Radicación No.	05001-31-03-010-2017-00137-01
Proceso	Ejecutivo
Demandante	Impobe Alliz Group Corporation S.A.S. en reorganización
Demandada	Juan Camilo Usquiano Medina
Procedencia	Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Decisión.	Confirma la sentencia apelada.
Sinopsis	Prosperan las excepciones denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.
Aprobación.	Proyecto aprobado en sesión virtual del día 10 de julio de 2023.
Rdo. Interno	001-18
Sentencia n°	027-23

Conoce la Sala del recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín el día 4 de diciembre de 2017, dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por la empresa IMPOBE ALIZZ GROUP CORPORATION S.A.S. EN REORGANIZACIÓN contra el señor JUAN CAMILO USQUIANO MEDINA.

**1. ANTECEDENTES**

**1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA.**

La entidad demandante, por intermedio de apoderada judicial, formuló demanda ejecutiva en contra del señor JUAN CAMILO USQUIANO MEDINA, con fundamento en los siguientes supuestos fácticos:

A través de apoderado facultado para tal fin, el ejecutado otorgó el pagaré No. 2 con espacios en blanco que debían ser llenados conforme a la carta de instrucciones y a favor de la parte actora, el día 29 de marzo de 2013.

El título se llenó de acuerdo a lo convenido, por la suma de \$184'114.818,00, pagaderos el primero de marzo de 2017. Además, se pactaron intereses de plazo a la tasa del 2% mensual y de mora conforme a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera.

A la presentación de la demanda, el otorgante no ha pagado ninguno de los emolumentos pactados.

Se trata de una obligación expresa, líquida y actualmente exigible. En consecuencia, solicitó se librara mandamiento de pago en la forma reclamada en las pretensiones.

## **1.2. MANDAMIENTO EJECUTIVO**

El juzgador de primera instancia libró la orden ejecutiva en proveído del 21 de marzo de 2017, conforme lo solicitado en el libelo introductorio.

## **1.3 EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA DEMANDADA.**

Notificado el ejecutado de la orden de apremio, se opuso a las pretensiones y dentro del término legal propuso los medios de defensa que nominó:

- Contra la acción cambiaria, artículo 784 del Código de Comercio:

1.3.1. *No haber sido el demandado quien suscribió el título.* Se sustenta en que el demandante creó el pagaré y la carta de instrucciones a espaldas del señor Usquiano Medina, colocando tanto el valor como las fechas de elaboración y vencimiento, con el único fin de defraudar al demandado, extralimitándose en el mandato que éste le otorgó.

1.3.2. *La falta de representación o de poder suficiente de quien haya suscrito el título a nombre del demandado.* Se soporta en que el ejecutado otorgó poder al señor Carlos Mario de Jesús Vega Cuartas, única y exclusivamente para representarlo frente al bien inmueble consistente en un edificio de tres pisos, con un área de 183,68 metros cuadrados, situado en el sector de El Poblado de la ciudad de Medellín, distinguido con la nomenclatura Calle 10 Nos. 42/23 /25 /27 y matrícula inmobiliaria Nro. 001-373397. El poder limitaba la facultad del mandatario a representarlo para que pudiera respaldar las obligaciones financieras, surgidas del negocio jurídico que tenían los señores Carlos Mario Vega Cuartas y Juan Camilo Usquiano Medina, poder que se concedió a petición del señor Vega Cuartas.

- Las derivadas del negocio jurídico:

1.3.3. *Falta de legitimación por activa y falta de interés para obrar.* Se aduce que el demandado (sic) fue el mismo quien suscribió el título valor a favor de él mismo, ya que el señor Carlos Mario Vega es el representante legal de la empresa demandante, lo cual constituye una falsedad documental.

1.3.4. *Inexistencia de la obligación.* Aduce que el pagaré se suscribió bajo un mandato que se desatendió. Por lo cual no le asiste el deber de pagar la suma reclamada. Además, el demandante actúa de mala fe al querer cobrar un dinero acudiendo a la demanda, que conlleva una falsedad en documento, por lo cual ya instauró denuncias penales en contra del ejecutante, al haberse adueñado de manera ilícita de sus bienes, aprovechando el mandato.

1.3.5. *Cobro de lo no debido.* En este medio exceptivo se aduce que el demandante nunca le informó, como mandante suyo, de la suscripción del pagaré. Solo con la demanda se entera de su existencia, que por demás contiene una obligación falsa en sus dos connotaciones, material e ideológica, ya que nunca se le desembolsó la cantidad incorporada en el título por la firma demandante.

1.3.6. *Temeridad o mala fe.* Se sustenta la excepción en que el actor obro de mala fe con el único objetivo de defraudar a la sociedad de hecho conformada por ambas partes.

#### **1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Cumplidas las ritualidades propias para esta clase de asuntos, conforme las previsiones de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín el 4 de diciembre de 2017, profirió la decisión que selló la primera instancia, declarando prósperas las excepciones de mérito propuestas por la ejecutada, y nominadas “inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, temeridad y mala fe”. Ordenando cesar la ejecución y la compulsas de copias de lo actuado y obrante en el expediente, con destino a la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de la ciudad de Medellín, para que se investigue la posible comisión del delito de falsedad ideológica y en documento. Condenando en costas a la parte vencida.

#### **1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.**

Dentro del término establecido en el artículo 322 del C. General del Proceso, la apoderada de la ejecutante interpuso recurso de apelación, manifestando que se ratifica en todos los hechos y pretensiones de la demanda, y los argumentos expuestos al descorrer el traslado de las excepciones, puesto que el demandado fue quien efectivamente contrajo la obligación de pagar el importe del pagaré, a través de las facultades conferidas al señor Carlos Mario Vega Cuartas en el poder especial, amplio y suficiente que le otorgó el 14 de marzo de 2013.

De otro lado, señala que el pagaré es un título valor que cuenta con todos los requisitos legales para su exigibilidad. Y que el negocio jurídico que lo sustenta, no pudo ser explicado por el representante legal de la empresa demandante, dada la incapacidad médica que le impidió asistir a las audiencias practicadas, lo que le hubiera permitido presentar los documentos que tiene en su poder. Finalmente señala que de la prueba pericial no le fue dado el traslado correspondiente para ejercer su derecho de contradicción, hecho que le resta validez a la prueba.

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, se acojan las pretensiones de la demanda y se ordene seguir adelante la ejecución.

## **2. CONSIDERACIONES.**

**2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES.** Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito del proceso ejecutivo singular, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

**2.2. PROCESOS EJECUTIVOS.** Por sabido se tiene que el litigio del tenor que nos ocupa reclama la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que conste, entre otros, en un documento proveniente del deudor o de su causante y que constituya plena prueba en contra de él, siendo esa la razón para que con la demanda deba allegarse un documento de la condición anotada, ello según lo previene el art. 422 del C: G. del P. Por lo que, cualquier hecho que tienda a desconocer la existencia o exigibilidad de dicha obligación debe alegarlo y probarlo el ejecutado según lo reglado en el artículo 167 del C.G.P.

En el caso *sub-examine*, para invocar la ejecución se presentó un pagaré denominado No. 2, el cual contiene la obligación que el señor Carlos Mario Vega Cuartas, actuando en nombre y representación del señor Juan Camilo Usquiano Medina, adquiere por la suma de \$184'114.818,00, más intereses corrientes a la tasa del 2% mes vencido, el día 29 de marzo de 2013, para ser cancelada el 1º de marzo de 2017.

En principio se puede señalar que el título aportado como base de la ejecución, contiene obligaciones claras, expresas, exigibles, provenientes del deudor ejecutado. No obstante el documento al que nos hemos referido, fue tachado de falso por el demandado, en virtud de no reconocer la obligación por la que se le convoca al proceso, y tampoco ser la persona obligada.

**2.3. LA APELACIÓN.** La parte demandante, ante la prosperidad de los mecanismos de defensa propuestos en contra de la ejecución y la orden de cesar la ejecución, dispuestos por el juez *ad quo*, presentó recurso de alzada, reiterando en primer lugar que las obligaciones fueron adquiridas por el demandado, conforme el poder especial, amplio y suficiente que otorgó al señor Carlos Mario de Jesús Vega Cuartas, quien en su nombre suscribió el pagaré. Además, el título ejecutivo cuenta con todos los requisitos legales para su exigibilidad, por tanto es viable la ejecución de la obligación en el contenida.

De otra parte, reclama el no haber sido escuchado en interrogatorio el representante legal de la sociedad demandante IMPOBE ALIZZ GROUP CORPORATION S.A.S., señor Carlos Mario Vega Cuartas, por diferentes razones de orden médico, siendo éste y no el representante legal suplente, quien conoce los pormenores del negocio jurídico soporte de la obligación y posee la documentación que lo demuestra.

Finalmente señala que el dictamen pericial acogido por el juez de primera instancia, no fue conocido por la parte actora, a través del traslado correspondiente al

momento de su aportación, ni tampoco en la audiencia, por tanto, no pudo ejercer el derecho de contradicción, hecho que le resta validez a la prueba.

Sobre los reparos, es preciso hacer las siguientes precisiones:

### **2.3.1. LA OBLIGACIÓN.**

Encontramos que formalmente el documento allegado como base de la acción reúne parte de los requisitos consagrados en el artículo 422 del Estatuto Procesal Civil, para ser considerado título ejecutivo. Ya que se observa que contiene una obligación clara, expresa y exigible, en cuanto a la forma de ser satisfecha.

No obstante, existe duda sobre si proviene o no del deudor acá demandado, y si por tanto constituye plena prueba contra él.

Sobre este aspecto en particular, la demandante indica que se cumplen todos los requisitos que requiere el título para su exigibilidad, por el contrario, el demandado se opone a la ejecución. En tal virtud, es del caso entrar a determinar si los medios de defensa que atacan la obligación y fueron declarados prósperos por el juez de conocimiento en primera instancia, tenían la virtualidad necesaria para salir avantes como lo declaró el juez a-quo, o por el contrario no debieron atenderse y en consecuencia es viable continuar adelante la ejecución como lo reclama la apelante.

**2.3.2. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN y COBRO DE LO NO DEBIDO.** Se dice que en el demandado nunca hubo la intención de obligarse en los términos que indica el pagaré aportado con la demanda, pues el poder que concedió a quien obra como

representante legal de la empresa ejecutante, se otorgó solo respecto del manejo que debía darse al bien inmueble de propiedad del señor Juan Camilo Usquiano Medina, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001-373397 Por tanto, no se atendió el mandato recibido y hubo mala fe en el señor Vega Cuartas, quien se aprovechó del poder otorgado, suscribiendo un documento que contiene una falsedad.

Sobre este asunto, basta con analizar las pruebas obrantes en el proceso, para establecer que, si bien existe un poder especial, otorgado por el señor Juan Camilo Usquiano al señor Carlos Mario de Jesús Vega Cuartas (folios 8 y 9, cuad. 1), el mismo habla de la facultad que otorga el poderdante a su apoderado para dar el inmueble allí descrito, en garantía, respaldar deudas que se contraigan con hipotecas, firmar títulos valores, adquirir seguros, etc.

Al reclamar el ejecutado sobre la indebida suscripción del documento que se le ejecuta y el no habersele informado de la deuda allí plasmada, antes de iniciar una demanda, la demandante solo ratificó lo escrito en el poder otorgado al señor Vega Cuartas, sin aportar pruebas que acreditaran que tipo de negocio se efectuó, bajo qué condiciones, valor, y conceptos se celebró y así respaldar la suscripción del título base de la presente acción.

Esta ausencia de prueba del negocio subyacente, es la que conduce a señalar que, como bien lo indicara el juez a-quo, no existen elementos que permitan inferir un origen legal y acorde con el poder especial que recibiera el ahora representante legal de la demandante, para declarar que realmente existe una obligación que debe ser satisfecha por quien funge como deudor del título que se ejecuta.



No sobra recordar que, conforme lo previsto en el artículo 167 de la codificación procesal civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

En este caso, es claro que, si se pretende emitir un título valor por mandato del deudor, era preciso que se acreditara que se había suscrito el título atendiendo tal mandato y con los fundamentos jurídicos y materiales que lo demostraran. Lo cual no se cumplió por el demandante.

De otro lado, siendo el representante legal de la empresa demandante, además el mandatario del deudor, con más rigor y transparencia debía demostrar el origen de la obligación, pues estas dos calidades imponen el deber de acreditar con mayor lucidez su proceder, para evitar la desconfianza que generó esta acción, pues actuando como representante legal de la demandante fue quien suscribió el título ejecutivo en representación del demandado.

Y no es justificación a la falta de prueba, el decir que, por las incapacidades médicas, el señor Vega Cuartas no pudo aportar los documentos que demostraran la existencia del negocio que dio origen a la obligación, pues al momento de descorrer el traslado de las excepciones era la oportunidad legal de aportar los elementos de juicio pertinentes. Ello tal como lo tiene previsto el canon 173 del C.G.P. al regular la oportunidad para presentar pruebas “**OPORTUNIDADES PROBATORIAS.** Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código”.

Y el artículo 433 al reglar el trámite de las excepciones formuladas en los procesos ejecutivos indica “**443. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES.** El trámite de excepciones se sujetará a las siguientes reglas:

1. De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá traslado al ejecutante por diez (10) días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, y **adjunte o pida las pruebas que pretende hacer valer**”. (resaltado fuera de texto).

Además, el representante legal suplente de la empresa Impobe Alizz Group Corporation S.A.S., también pudo haberse presentado a rendir interrogatorio para dar las explicaciones relacionadas con la razón por la cual la empresa era acreedora del demandado, lo cual no ocurrió.

Es por ello que las excepciones declaradas como probadas en la sentencia atacada, denominadas “inexistencia de la obligación” y “cobro de lo no debido” estaban llamadas a prosperar.

### **2.3.2. TEMERIDAD Y MALA FE.**

Sobre este medio de defensa que se declaró probado en el fallo censurado, basta indicar que el dictamen pericial fue claro en explicar porque consideraba la existencia de una posible falsedad ideológica con relación a las fechas probables de elaboración de los folios contentivos de la demanda, el poder, pagaré y carta de autorización para llenar espacios en blanco del pagaré, pues encontró similitudes en las características de elaboración y producción, tipo de letra, fuente, interlineado, color, estado general, gramaje y tamaño de la hoja, por lo que consideró que era muy probable que se hubieren producido en un mismo tiempo.

La demandante, si bien no ejerció el derecho de contradicción al dictamen dentro de la oportunidad que tuvo para ello, si presenta como uno de sus argumentos para controvertir el que se hubiere valorado por el juzgador de primera instancia y se le diera credibilidad a lo dictaminado por el perito, el que no se le corrió traslado de la experticia.

Para dirimir esta inconformidad, es preciso remitirnos a los folios 84 y 85 del cuaderno 1, donde obra el auto de fecha 17 de agosto de 2017 que convocó a la audiencia prevista en los artículos 372 y 373 del C.G.P., y decretó las pruebas pedidas por ambos extremos de la litis, indicándose en el numeral 2.4 de la prueba pericial solicitada por la parte ejecutada que *“Se autoriza la prueba pericial solicitada, la parte interesada allegará proyecto de dictamen por parte de perito experto en caligrafía, el proyecto será rendido por escrito a más tardar diez (10) días antes de la audiencia, fecha a partir de la cual quedará en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia....”*, decisión autorizada por el artículo 231 ibídem.

Fue así como el 2 de noviembre de 2017, el perito Luis Fernando Aguirre Sepulveda presentó la experticia, que se anexó al proceso y obra de los folios 101 a 113 del cuaderno 1, momento desde el cual quedó a disposición de las partes.

La primera oportunidad en que se adelantó audiencia fue el 14 de noviembre de 2017, la cual fue suspendida por ausencia de ambos extremos de la litis, para luego celebrarse el 4 de diciembre de 2017. Quiere decir lo anterior que transcurrieron más de los diez días indicados en el auto que abrió a pruebas, para que las partes conocieran el dictamen aportado por el auxiliar mencionado y se hubieren

pronunciado frente a él, o hubiere presentado un nuevo dictamen la parte contra quien se adujo, tal como lo establece el artículo 228 del estatuto procesal civil.

Razón de más para señalar que la demandante tuvo la oportunidad de controvertir la experticia. Aunado a lo anterior, el juez a quo luego de interrogar al perito y conceder el uso de la palabra a la parte demandada, le concedió a la ejecutante el mismo derecho para que indagara al perito sobre su trabajo, declinando hacer uso de tal prerrogativa como consta en la grabación de la audiencia, lo cual denota que sí tuvo oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, en la forma reglada por el artículo 288 citado, y no hizo uso de ese derecho.

Por tanto, no hay razón para desvirtuar la prueba pericial recaudada en el litigio y su aceptación por parte del juzgador de primera instancia, lo cual será confirmado en esta instancia, dado que no se observa configurado elemento alguno que reste mérito a lo afirmado en el dictamen.

### **3. CONCLUSIÓN.**

Conforme lo analizado precedentemente, no hay lugar a variar la decisión de primera instancia, en la medida que los reparos expuestos por la parte apelante, no tuvieron la fuerza suficiente para derruir los fundamentos en los que se edificó la decisión del juez *a quo*. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **FALLA:**

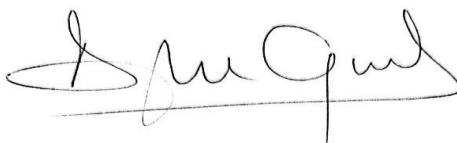
**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín el 4 de diciembre de 2017, dentro del proceso EJECUTIVO

singular instaurado por la empresa IMPOBE ALIZZ GROUP CORPORATION S.A.S. EN REORGANIZACIÓN en contra del señor JUAN CAMILO USQUIANO MEDINA, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Se condena en costas a la parte apelante. Se fijan como agencias en derecho la suma correspondiente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago. Liquídense en primera instancia.

**TERCERO:** Ejecutoriada la presente decisión, devuélvase el expediente físico a su lugar de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**



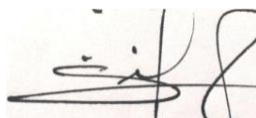
**ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA**  
**Magistrado**

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**  
**Magistrada**

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

**JOSE GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO**  
**Magistrado**